



Los fondos europeos exigirán a las empresas tener implantado un plan de compliance

Fuente: Cinco Días

Nos encontramos probablemente ante el impulso definitivo de la cultura de cumplimiento normativo en nuestro país, siendo esta una gran oportunidad (una más) para que todas aquellas organizaciones que, por algún motivo, se quedaron atrás, **empiecen a ser conscientes de la relevancia de contar con este tipo de programas.**

Precisamente por ello, entendemos que todas aquellas organizaciones que hasta la fecha no cuentan con un programa de estas características deberían abordar, más pronto que tarde, su diseño e implantación para, con el debido asesoramiento, evitar en el futuro situaciones tan comprometidas como a la que en estos días se están teniendo que enfrentar aquellas que, tratando de acceder a los denominados fondos Next Generation EU, no se habían preocupado antes por contar con un programa de Compliance **o tener debidamente actualizado el que diseñaron varios años atrás.**

Estas nuevas exigencias en materia de cumplimiento normativo nos conducen a pensar que, en el corto plazo, contar con un programa de compliance o destinar una partida presupuestaria específica a la **prevención, detección y reacción frente a los riesgos** (no solo penales) a los que se enfrentan las organizaciones, dejará de ser una recomendación seguida solo por algunos, para convertirse en un must de todas las organizaciones de nuestro país, con independencia de su tamaño, estructura o volumen de facturación.

En este contexto de permanente evolución, y dada la necesidad de contar con un compliance como requisito para la concesión de los fondos europeos de recuperación, es previsible que muchas pequeñas y medianas empresas que todavía no cuentan con este tipo de programas **se vean en la obligación de diseñar e implantar sus respectivos programas** en un tiempo récord (90 días). Lo que resulta contrario al espíritu de este tipo de modelos o programas que deben ser diseñados de forma rigurosa y adaptándose a las características propias de cada organización, que deberán ser exhaustivamente analizadas a tal fin.

Lo razonable por tanto es que las organizaciones, cada vez más, cuenten con programas de compliance integrales que abarquen el cumplimiento de todas estas normas jurídicas, éticas y morales a las que recientemente se ha referido el Ministerio de Hacienda. Algo en lo que, sin duda, otros países de nuestro entorno **nos llevan varios años de ventaja.**

Aunque es cierto que la mencionada Orden no hace referencia expresa a los ya conocidos Modelos de Organización y Gestión de Riesgos Penales (compliance penal) como tal, es evidente que la obligatoriedad de contar con los estándares más exigentes para evitar o prevenir supuestos de fraude o corrupción supone que aquellas empresas que pretendan solicitar este tipo de ayudas **deberán haber implantado** programas que cumplan con los requisitos del artículo 31 bis de nuestro Código Penal. Pero no solo eso. Estos planes también deben contemplar y prevenir otros muchos riesgos no estrictamente penales que afectan a cada organización en cuestión, como puedan ser los **riesgos fiscales, medioambientales, de competencia o los laborales.**

De esta manera, las organizaciones que pretendan acceder a este tipo de ayudas deberán suscribir un firme compromiso de contar con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando

